

COALICIÓN PAN - NUEVA ALIANZA

PLATAFORMA ELECTORAL

PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2015

DISTRITO ELECTORAL FEDERAL 01 AGUASCALIENTES

COMBATE TOTAL A LA CORRUPCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

La lucha contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el uso indebido de recursos públicos sigue siendo una agenda pendiente en México. A pesar del avance alcanzado, en muchos estados donde no existen contrapesos institucionales o legislativos, gobiernos y gobernantes siguen incurriendo en prácticas ilícitas con absoluta impunidad y pareciera que sólo reciben castigo por razones políticas cuando sus excesos son inocultables, innegables y escandalosos.

En el ámbito federal los retos siguen siendo igual de importantes, sobre todo para impedir que muchas prácticas que empezaban a ser erradicadas regresen, y especialmente para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de la ley y el castigo a los malos funcionarios y gobernantes.

Deploramos que como en toda organización humana, en nuestro partido ha habido personas que incurrieron en faltas que ofendieron a los mexicanos. Con entereza hacemos frente a esta situación y reiteramos nuestro compromiso histórico de luchar frontalmente contra la corrupción.

La corrupción es un grave lastre sistémico para la democracia, para la estabilidad económica, para el desarrollo y para la calidad de vida de los mexicanos. En los últimos años se ha acelerado un círculo vicioso: la corrupción socava a las instituciones democráticas y cuando éstas son débiles, propician más corrupción.

Para fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos abiertos, transparentes y participativos, en primer lugar proponemos incluir en nuestra plataforma, las propuestas fundamentales para crear un sistema anticorrupción que blinde el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno. Reformas para fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Acciones legislativas para seguir impulsando un verdadero federalismo con controles eficaces sobre la deuda y la inversión públicas.

Las plataformas legislativas que registramos cada tres años ante la autoridad electoral son la huella imborrable de nuestro paso por el gobierno. En ellas consta que la lucha contra la corrupción ha sido permanente en nuestra labor legislativa, y por lo mismo, debemos reforzar los esfuerzos por garantizar desde el Congreso el derecho de los mexicanos a la participación activa en materia de control de la gestión y uso responsable de los recursos

públicos en todos los niveles de gobierno, mediante el fortalecimiento de instancias diseñadas expresamente para dicho propósito.

Considerando lo anterior, proponemos:

Iniciativa anticorrupción

Es fundamental que los distintos mecanismos, instancias y procedimientos definidos en la iniciativa para la creación del sistema anticorrupción se implementen correctamente, por lo que vigilarémos su cabal aplicación para que este sistema produzca resultados tangibles en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, para estimular conductas honestas y castigar actos deshonestos.

1.1 Modificar y generar la legislación necesaria para la creación e implementación por completo del Sistema Nacional Anticorrupción, en concordancia con la propuesta de reforma que, con el apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil, elaboramos y presentamos ante la Cámara de Diputados a principios de noviembre de 2014, con el fin de modificar los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 166 y 122 de la Constitución, dando un estricto seguimiento a la implementación de dicho sistema y promoviendo la participación ciudadana a partir de la denuncia de los actos de corrupción de los gobiernos.

1.2 Expedir las leyes secundarias y los distintos ordenamientos que permitan crear y cumplir con los objetivos del Consejo Nacional para la Ética Pública del Comité de Participación Ciudadana, así como de los observatorios ciudadanos que de él dependan, en los términos de autonomía y competencia expresados en la iniciativa panista, y deformados o anulados en el pre-dictamen que el PRI impulsó en la Cámara de Diputados.

1.3 Armonizar las facultades de sanción de las contralorías municipales, estatales y federal, ampliando facultades a tribunales y aplicando todo el Sistema Anticorrupción en el ámbito local.

1.4 Reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución para impedir que los servidores públicos puedan usar su inmunidad procesal para evadir la acción de la justicia.

Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana

La mejor manera de garantizar el buen uso de los recursos públicos y la eficiencia del gobierno es promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, porque así se generan bases sólidas para que entre todos vigilemos las decisiones tomadas y su orientación al bien común. Por ello, proponemos:

1.5 Reformar la Ley de Consulta Popular con el objetivo de garantizar el pleno derecho de los ciudadanos a la realización de una consulta y de este modo evitar una interpretación limitada y regresiva de sus fundamentos legales.

1.6 Realizar las reformas necesarias para la implantación de observatorios ciudadanos que le permitan a las organizaciones de la sociedad civil y a los ciudadanos participar en el seguimiento de la gestión pública.

1.7 Promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión del gasto de los recursos públicos de los tres órdenes de gobierno.

1.8 Fortalecer los mecanismos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en la Ley de Obras Públicas y Servicios para asegurar la transparencia y rendición de cuentas en torno al uso eficiente de los recursos destinados a la creación de infraestructura y obra pública en México.

Articular las iniciativas panistas sobre el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional Anticorrupción y de Sistema Nacional de Transparencia para una mejor rendición de cuentas y disuadir efectivamente la corrupción.

Aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia y acceso a la información pública, de protección de datos personales y de archivos, con el fin de salvaguardar la existencia, disponibilidad y acceso de la información, así como el trato adecuado de los datos personales.

1.9 Modificar el formato del informe presidencial con el propósito de que el titular del Ejecutivo conozca las opiniones de los legisladores y tenga la obligación de responderlas.

1.10 Establecer en la legislación respectiva mecanismos claros de rendición de cuentas para los entes reguladores de los distintos sectores: energético, competencia, acceso a información y protección de datos y telecomunicaciones.

1.11 Aprobar la Ley de Propaganda Gubernamental que regule el uso y el gasto en comunicación social de los tres poderes de la Unión.

Reforma del estado y federalismo

No podemos desvincular la lucha contra la corrupción de la solidez de nuestra democracia, del ejercicio de los derechos políticos y de las libertades públicas. Los ciudadanos demandan resultados y también defienden el ejercicio efectivo de sus derechos cívicos en los distintos niveles de gobierno, en especial, en los estados y municipios donde la tentación autoritaria es una amenaza constante y al acecho.

Perfeccionar nuestra democracia y sus instituciones es una tarea constante e inacabada, especialmente si observamos la profunda desigualdad entre el desarrollo democrático de los estados y municipios.

Es preciso revisar las tareas pendientes para alcanzar un federalismo que promueva mejores niveles de vida en todos los rincones del país y asumir desde el Congreso la promoción de reformas de gran alcance.

De manera especial, resulta indispensable defender los valores municipalistas de nuestra historia, que han recibido un ataque frontal con la iniciativa de reformas constitucionales presentadas por el titular del Ejecutivo.

No basta rechazar la intentona de arrebatar todas las funciones de seguridad pública que actualmente son responsabilidad del municipio, para concentrarlas en los gobiernos estatales y en el federal. Es necesario, por el contrario, realizar las reformas que permitan que los municipios puedan cumplir mejor sus funciones en vez de reducir sus facultades.

1.12 Reformar los artículos 115 y 116 constitucionales para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios en materia de seguridad pública, y para establecer esquemas subsidiarios para que la federación y los estados contribuyan al fortalecimiento institucional de los municipios y los apoyen en el cumplimiento de todas sus funciones, sin desplazarlos y anularlos, como pretende la iniciativa de contra reforma constitucional a los artículos 115 y 116 presentada en diciembre de 2014 por el titular del Ejecutivo.

1.13 Promover la aprobación de la Ley de Derecho de Réplica que garantice a los ciudadanos en todo el país la defensa de su honor y buena fama pública.

1.14 Ampliar los periodos de sesiones del Congreso para el uso eficaz de los tiempos legislativos.

1.15 Concretar la Reforma Política del Distrito Federal a efecto de concluir el proceso de transformación de su organización política desde una perspectiva democrática y federalista, generando equilibrio entre los órganos locales, reduciendo las facultades que ejerce el Órgano de Gobierno y estableciendo a los gobiernos delegacionales como un orden de gobierno local.

1.16 Realizar las reformas necesarias para otorgar la sindicatura del municipio al candidato que quedó como primera minoría, con el objetivo de promover la existencia de una primera instancia de fiscalización de las cuentas públicas municipales.

1.17 Reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y reglamentos correspondientes para hacer un uso racional de los recursos y apoyos otorgados a las comisiones, grupos parlamentarios, y legisladores, que optimice los espacios e infraestructura asignados cada periodo legislativo, de tal manera que se eviten obras innecesarias, duplicidades de apoyos y usos dispendiosos del presupuesto asignado a las Cámaras.

Federalismo hacendario, deuda de estados y municipios

La irresponsabilidad en materia de deuda pública con la que se han conducido muchos gobiernos estatales y municipales, cobijados por la falta de la aplicación efectiva de la división de poderes en el ámbito local, implica una verdadera amenaza para la estabilidad económica del país, además de los efectos adversos que ésta tiene para el desarrollo de cada municipio y cada estado. Por eso, promoveremos:

1.18 Facultar a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda fiscalizar las participaciones federales a los estados.

1.19 Los ciudadanos demandan resultados y también defienden el ejercicio efectivo de sus derechos cívicos en los distintos órdenes de gobierno, en especial, en los estados y municipios donde la tentación autoritaria es una amenaza constante y al acecho.

1.20 Fortalecer la gestión de los gobiernos municipales del país, mediante el incremento de sus atribuciones y responsabilidades gubernamentales, así como aumentar sus fuentes de ingresos.

Gobierno de calidad

El fin último del combate a la corrupción y de la actividad de nuestros legisladores es promover un gobierno que dé resultados, sea eficiente y mejore las oportunidades para todos los mexicanos, en especial para aquellos ciudadanos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Es por lo tanto fundamental fortalecer la confianza en la autoridad a través de la promoción de sistemas que favorezcan la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de los diferentes órdenes de gobierno, así como a través de una adecuada profesionalización del servicio público. Por ello, vamos a:

1.21 Fortalecer las capacidades y mecanismos de supervisión y seguimiento en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en materia de apertura de datos, para garantizar mediante estándares de usabilidad y acceso en el diseño de sus portales, la disponibilidad de la información a la que tienen derecho los ciudadanos.

1.22 Reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para incorporar lo relativo a los daños y perjuicios en los bienes de los ciudadanos, por acciones de los cuerpos policiales de la Federación y de la Defensa Nacional, cuando sus actos no se ajusten a la ley o se declare la inocencia de los inculpados.

CRECIMIENTO JUSTO, DURADERO Y SOSTENIBLE

México lleva más de una década operando en un marco de estabilidad económica y financiera gracias a que se mantuvo una política fiscalmente responsable, a que se ha propiciado la apertura económica, a que se ha invertido razonablemente en su infraestructura y a que se ha fortalecido un sector exportador dinámico. Este marco probó ser importante para sortear la mayor crisis económica que ha experimentado la economía mundial desde 1929.

No obstante, incluso antes de la crisis, el crecimiento económico durante las últimas décadas no ha permanecido a la altura de las necesidades del país para crear empleo y bienestar suficientes, y ha estado por debajo de economías del mundo con perfiles y potencial comparables. Se trata de una economía que aún refleja serias debilidades, las

cuales, pese a los esfuerzos de los últimos 20 años, no han sido corregidas del todo: opacidad, instituciones débiles, legalidad cuestionada, competitividad limitada, baja productividad.

Por otra parte, pese a las reformas estructurales generadas, el gobierno actual ha provocado nuevos riesgos al abandonar los principios básicos de responsabilidad y prudencia fiscal, presupuestal y recaudatoria que han caracterizado la política económica de las últimas décadas.

En un contexto donde el crecimiento tendencial presenta síntomas de estancamiento, la reacción del gobierno, lejos de promover e incentivar los dinamismos que requiere la economía para retomar la senda del crecimiento, ha generado mayor incertidumbre y dudas sobre su capacidad para sacar adelante la agenda económica que requiere el país. Es necesario restablecer la responsabilidad fiscal y financiera, promover un marco de entendimiento y cooperación económica que devuelva la confianza en la economía nacional e identificar las condiciones y políticas nacionales para el crecimiento con empleo decente, sustentable y que genere prosperidad para todos los mexicanos.

Salario digno y economía familiar

Las enormes desigualdades en las que viven los mexicanos deben encontrar una solución en la economía misma, es decir, en un modelo económico que genere suficientes empleos formales con salarios dignos. No se trata de una condición que vaya a resultar fácil de inducir y requerirá de un verdadero acuerdo nacional cuyo fin sea identificar las condiciones estructurales e institucionales de un nuevo modelo económico que permita reencontrarnos con la ruta de un crecimiento justo, duradero y sustentable. Una de esas condiciones institucionales que debemos y podemos impulsar desde ahora es la redefinición de la política de salarios mínimos, con el fin de iniciar un proceso de reajuste de la economía que fortalezca los mercados internos y genere mayor equidad, así como mayor bienestar a las familias. Para ello se propone:

2.1 Reformar las leyes reglamentarias del artículo 123, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia y garantizar que la fijación de éste se establezca bajo los criterios establecidos y con seguimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Al mismo tiempo, se requiere que el salario mínimo se establezca sobre una línea de bienestar basada en el valor de una canasta básica que tome en cuenta los hábitos y costumbres de las familias mexicanas, que considere los cambios en la productividad, así como la capacidad de las empresas y de las unidades económicas.

2.2 Promover las reformas necesarias con el objetivo de facultar a las trabajadoras y los trabajadores para realizar retiros anticipados de fondos de ahorro de largo plazo, y con ello blindar el ingreso familiar frente a situaciones de inestabilidad económica, así como fortalecer las atribuciones en materia de control y sanción de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios

Financieros, a fin de proteger de manera integral y expedita tanto los derechos de los consumidores como el gasto familiar.

2.3 Aprobar leyes que garanticen el cumplimiento eficaz del principio a trabajo igual, salario igual entre hombres y mujeres, para así eliminar la discriminación en la percepción del salario por cualquier otra causa ajena al desempeño productivo y profesional.

Empleo y mercado laboral

Una obligación fundamental del marco institucional en una economía justa es garantizar el establecimiento de condiciones laborales que permitan el desarrollo de empleos decentes, dignos y bien remunerados, a través de los cuales se promueva el pleno desarrollo del ser humano y el bienestar integral de las familias. En esta materia existen enormes diferencias entre sectores, regiones y tipo de unidades económicas, por lo que es importante generar condiciones institucionales favorables para establecer mínimos fundamentales que deban ser cumplidos a cabalidad por todos los agentes económicos, sin menoscabo de la viabilidad operativa de dichas unidades económicas.

2.4 Reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo para dar cumplimiento a los temas que quedaron pendientes de aprobar en la reforma laboral de 2012. El objetivo general es establecer procedimientos claros y equitativos que permitan que las relaciones laborales se desarrollen en apego a los principios de justicia laboral, democracia sindical y de rendición de cuentas por parte de las dirigencias sindicales.

2.5 Reformar el artículo 123 constitucional en materia de respeto a los derechos humanos y laborales de las mujeres trabajadoras embarazadas.

2.6 Reformar diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para fortalecer la protección y beneficios a los trabajadores, robusteciendo el Seguro de Desempleo, además de otras prestaciones vinculadas al cuidado de hijos tanto de padres como de madres.

2.7 Reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de los derechos de las mujeres trabajadoras, a fin de reducir la violencia y la discriminación laboral.

2.8 Proponer reformas legales y políticas institucionales que contemplen la equidad de género y la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo remunerado y no remunerado, como horarios flexibles, derechos de paternidad y responsabilidades familiares, permisos por emergencias y economía del cuidado, entre otras.

2.9 Impulsar la ratificación del Convenio 156 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre Responsabilidades Familiares, el cual compromete al Estado mexicano a instrumentar políticas que eviten la discriminación laboral de personas con responsabilidades familiares.

2.10 Revisar la legislación para establecer mejores condiciones en los juicios laborales, reduciendo su dificultad, complejidad y demora.

2.11 Revisar la legislación para fortalecer las capacidades de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de manera que estén menos saturadas y ofrezcan una atención oportuna y eficaz.

2.12 Homologar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a las reformas a Ley Federal del Trabajo en materia de democracia, transparencia y rendición de cuentas de los sindicatos.

Política fiscal y presupuestal

México debe recuperar la ruta de la responsabilidad fiscal y presupuestaria. No se debe permitir al gobierno actual poner en riesgo la estabilidad económica nacional con conductas imprudentes que generan condiciones de vulnerabilidad económica y que producen riesgos evidentes frente a una potencial volatilidad externa. Ha quedado claro que la reforma fiscal del gobierno tiene efectos regresivos sobre el curso de la economía nacional, y por ello es necesario revertirlos mediante acciones que restauren la confianza de los actores económicos.

2.13 Promover iniciativas para revertir los aspectos negativos de la reforma hacendaria aprobada por los legisladores del PRI, PRD y PVEM en 2013; entre otros, restablecer la tasa diferenciada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las regiones fronterizas; restablecer el Régimen de Pequeños Contribuyentes; eliminar los topes a los rubros deducibles, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

2.14 Reformar la Constitución para eliminar las exenciones en el pago del impuesto predial y clarificar en el artículo 115 constitucional todas las excepciones que existen en materia de inmuebles federales, con el objeto de reconocer de manera expresa mayores potestades tributarias de los órdenes locales para consolidar sus haciendas, generar estabilidad financiera y menos dependencia de los recursos federales.

2.15 Reformar el artículo 26 de la Constitución, en su Capítulo I De los Derechos y las Garantías, para que el gasto público sea una herramienta efectiva para reducir la pobreza, la marginación, la desigualdad y la vulnerabilidad, por lo cual debe enfocarse a reducir brechas de bienestar. La evaluación del gasto deberá ser un requisito para los tres órdenes de gobierno, garantizando un impacto favorable y generalizado en el bienestar de los mexicanos.

2.16 Reformar la Ley de Coordinación Fiscal con el objeto de incrementar gradualmente en el mediano plazo del 20 al 30 por ciento el Fondo General de Participaciones de Estados y Municipios.

2.17 Promover una reforma hacendaria que permita contar con una política tributaria sujeta a criterios de proporcionalidad, progresividad, equidad y justicia distributiva, que simplifique el pago de impuestos y que genere certeza jurídica y simetría fiscal para los contribuyentes.

2.18 Reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de incorporar criterios de elegibilidad y seguimiento para aquellos proyectos de inversión que habrán de ejecutarse con recursos plurianuales, a fin de implementar una política de gasto redistributiva que concrete la rectoría del Estado y coadyuve al crecimiento económico sostenido.

Asimismo, impulsar reformas a la citada ley enfocadas a evitar la discrecionalidad en la asignación de recursos presupuestales e incorporar criterios de elegibilidad que fortalezcan la toma de decisiones basadas en elementos y valoraciones técnicas.

2.19 Reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta para ampliar las opciones de deducibilidad de personas morales correspondientes a los gastos de previsión social y educación, eliminar los topes en las deducciones que se aplican a las personas físicas y establecer en paralelo al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), la oportunidad de que los contribuyentes puedan optar por tributar bajo el antiguo Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS), a fin de estimular a la economía formal y combatir la elusión fiscal, otorgando incentivos a los contribuyentes para recabar recibos con todos los requisitos fiscales en sus operaciones cotidianas.

2.20 Reformar la Ley General de Deuda y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que el financiamiento público que solicita el Gobierno Federal sea discutido y aprobado bajo criterios técnicos y transparentes en el contexto del paquete económico.

2.21 Modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de transparentar y regular las adecuaciones presupuestarias que realice el Ejecutivo respecto al presupuesto calendarizado y programado, acotando así el nivel de discrecionalidad del Gobierno Federal.

2.22 Redefinir de manera integral el pacto fiscal con la participación de las entidades federativas y municipios y las instituciones del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este pacto debe tener como finalidad el equilibrio de las finanzas públicas federales y ser redistributivo, para reducir las desigualdades regionales y locales, aumentar la capacidad financiera de los municipios y atender las demandas más urgentes de los ciudadanos.

2.23 Exigir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente en su portal de internet y ante las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, un análisis detallado sobre la progresividad y eficiencia de los diversos gravámenes.

2.24 Contar con políticas fiscales responsables, cuya eficacia se encuentre salvaguardada a través de una legislación completa e integral.

2.25 Revisar los distintos regímenes fiscales contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación para mejorar las condiciones de competitividad en las fronteras y evitar el crecimiento inflacionario que se genera por las excesivas cargas fiscales a los

residentes y empresas, a efecto de impedir el desplazamiento de capitales que debilita la creación de empleos en perjuicio de la economía nacional.

Finanzas públicas y rendición de cuentas

Una economía próspera requiere de la obligación de los gobiernos a mantener finanzas públicas sanas y generar las certezas institucionales necesarias para los agentes económicos respecto a la conducta presupuestaria. Igualmente, los ciudadanos requieren de garantías sobre el buen uso y la responsabilidad en el ejercicio de los presupuestos públicos, especialmente en el ámbito local, donde en algunos estados y municipios todavía prevalecen conductas contrarias a estos principios fundamentales de probidad, prudencia y transparencia en el ejercicio del gasto público. Para lograrlo, proponemos:

2.26 Reformar la Constitución para establecer el desarrollo racional de proyectos de infraestructura plurianuales, a fin de garantizar certidumbre jurídica de las inversiones que permitan la conclusión de las obras de infraestructura en el plazo establecido, asegurando los recursos suficientes para que todo el proyecto se termine en tiempo y forma.

2.27 Impulsar la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios con el objeto de que se implemente una verdadera estrategia en materia de endeudamiento con criterios objetivos, que impidan sobrepasar sus capacidades financieras y que garanticen la transparencia en el destino de los recursos. Además, que impulse prácticas de presentación pública, discusión y aprobación del endeudamiento público, a fin de contar con criterios sólidos en términos de la rentabilidad social y de su impacto para los siguientes años.

2.28 Reformar el artículo 79 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para que la Auditoría Superior de la Federación audite la cuenta pública y los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios y el Distrito Federal, sin excepción de las participaciones federales. Esto, a más tardar, tres meses después de terminar el ejercicio fiscal.

2.29 Vigilar de manera activa y generar iniciativas que obliguen al gobierno a preservar finanzas públicas sanas, mantener la estabilidad económica, ejercer una política económica que no dispare presiones inflacionarias y mantenga abatido el déficit del sector público.

Competitividad y promoción de la inversión productiva

Las reformas constitucionales en materia de competencia y regulación de la economía nacional son un gran paso adelante para transformar de fondo las estructuras monopólicas y oligopólicas que han maniatado el enorme potencial de crecimiento y desarrollo nacional. No obstante, es fundamental que la legislación secundaria y las políticas públicas materialicen de manera efectiva lo que la letra de las reformas plantea, por lo que es imperativo dar seguimiento a la conducta del gobierno en la aplicación de la ley y evitar el uso arbitrario del poder para favorecer los intereses de los agentes monopólicos, en detrimento del interés público y del bien común. Por ello, se propone:

2.30 Vigilar y defender las reformas constitucionales en materia de lucha contra los monopolios, mediante reformas a leyes secundarias para fortalecer la autonomía de los órganos reguladores y los instrumentos a su disposición, con el fin de que puedan actuar de manera efectiva y garanticen una competencia real en la economía mexicana.

2.31 Reformar la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para promover la capacitación permanente y sistemática de los empresarios medianos y pequeños, que les garantice apoyos continuos y consistentes con el ciclo de maduración de sus empresas, para darle seguimiento al impacto de los apoyos otorgados y para permitirles acceder oportunamente y en mejores condiciones a los distintos fondos de apoyo.

2.32 Reformar diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de establecer disposiciones que simplifiquen el otorgamiento de apoyos, les permitan defenderse de prácticas monopólicas y proteccionistas, generen mayores facilidades para su incorporación a programas de proveeduría y desarrollo de agrupamientos y cadenas productivas, con el fin de fortalecer su participación competitiva en el mercado interno y desarrollar sus capacidades exportadoras.

2.33 Promover una Ley Nacional de Emprendimiento que fomente la formación de jóvenes emprendedores, con la finalidad de otorgarles apoyos, subsidios y beneficios tributarios para crear empresas y generar empleos, para la promoción de capacidades, para su capacitación, para el desarrollo de talento y para materializar iniciativas empresarial y tecnológicamente innovadoras.

Desarrollo regional

En México las desigualdades regionales siguen representando la pérdida de oportunidades que generen la dinámica de crecimiento que requerimos para ser un país más próspero y equitativo. Es fundamental que identifiquemos prácticas y mecanismos que nos permitan optimizar los apoyos y recursos de promoción a la inversión con los que cuentan los gobiernos, de tal manera que se propicien dinámicas de crecimiento regional y el desarrollo competitivo de sus empresas, así como del conjunto de agentes económicos locales, con el claro propósito de generar beneficios a sus comunidades y familias. Con base en ello, proponemos:

2.34 Reformar la Ley General de Turismo para que los tres órdenes de gobierno se coordinen y apliquen políticas públicas encaminadas a impulsar, consolidar y regular el turismo de la salud, proponer incentivos fiscales y apoyos al turismo de negocios, ecológico, de aventura, de cruceros, convenciones, eventos, congresos y foros, a fin de impulsar la llegada de visitantes extranjeros que incrementen la derrama económica en favor del desarrollo regional.

2.35 Reformar la Ley de Instituciones de Crédito para consolidar la participación de la Banca de Desarrollo a nivel estatal y así promover el desarrollo regional.

Campo

Es fundamental que los apoyos y subsidios otorgados al campo mexicano lleguen a quien realmente los necesitan, evitando el uso indebido y el dispendio irresponsable de esos recursos. Es igualmente fundamental que los beneficios obtenidos por los productores también favorezcan de manera directa a los trabajadores del campo y a sus familias, y contribuyan a reducir las enormes e indignantes desigualdades que existen en las regiones y localidades rurales del país.

2.36 Reformar la Ley Agraria para proteger los derechos sobre la tierra de los campesinos y apoyar el desarrollo social y económico de los núcleos agrarios. Fortalecer el Registro Agrario Nacional a fin de dar certidumbre al proceso de certificación de la tenencia de la tierra ejidal y comunal.

2.37 Reformar la Ley de Desarrollo Rural para fortalecer los lineamientos y criterios de transparencia, eficiencia y otorgamiento de apoyos a productores en situación de mayor vulnerabilidad.

2.38 Reformar la Ley de Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural para fortalecer las facultades de AGROASEMEX en materia de vigilancia, para mejorar el desempeño de los programas públicos a su cargo.

2.39 Reformar la Ley de Aguas Nacionales con el objetivo de mejorar los mecanismos de participación social de los usuarios del agua para una óptima gestión del recurso hídrico a nivel de cuencas, con base en principios de transparencia y rendición de cuentas.

JUSTICIA, DERECHOS Y CONVIVENCIA NACIONAL

Los mexicanos aspiramos a tener un país donde prime la seguridad, se respeten y hagan cumplir los derechos humanos, y se generen entornos de convivencia que permitan desarrollarnos en comunidades libres de todo tipo de discriminación y violencia, donde se imparta justicia eficaz, pronta y expedita, y se cumplan la Constitución y las leyes, privilegiando el Estado de derecho y la soberanía popular. Sólo en una sociedad semejante puede tener primacía la persona humana.

El hecho de que para millones de mexicanos estas condiciones fundamentales de libertad, respecto a los derechos y convivencia sean aún una aspiración, nos indigna y lastima a todos. Es fundamental avanzar en la creación de los entornos y el fortalecimiento de las instituciones que garanticen plenamente los derechos de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que sufren de discriminación y marginación. Necesitamos promover modelos de convivencia respetuosa, tolerante y armoniosa para la vida nacional, garantizar la paz y la eliminación de toda forma de violencia en contra de las personas y las comunidades.

Los Partidos Coaligados sustentan una visión integral y moderna de la seguridad pública, bajo la premisa de ser una función a cargo de las autoridades de la Federación, del Distrito

Federal, estados y municipios, para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

La función de seguridad pública debe comprender aspectos preventivos, punitivos y de reinserción social; ello implica que se ejerza, en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las instituciones policiales, del ministerio público, de las instancias encargadas de aplicar las sanciones por infracciones administrativas, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, y de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes.

Para una convivencia armónica, el énfasis de las políticas públicas en la materia debe basarse en la prevención de hechos antisociales y delictivos, con la participación de la comunidad como coadyuvante en tareas que no son exclusivas de las autoridades, como la evaluación de políticas de prevención y del desempeño de las instituciones en la materia, para apoyar la impartición de educación y capacitación en materias de prevención del delito, para difundir y generar campañas de denuncia y queja anónima ciudadana, que ayuden en la detección temprana de la criminalización, así como en la integración de observatorios ciudadanos.

En la función de la seguridad pública, pugnamos por un verdadero sistema articulado, coordinado y comunicado entre órdenes de gobierno, regido por los principios de subsidiariedad y respeto a la autonomía de estados y municipios, con instituciones profesionales en la materia, cuyos integrantes se conduzcan con absoluto respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones y cercanos a sus comunidades.

Finalmente, requerimos acelerar los cambios y producir los avances institucionales en nuestro sistema de justicia que exigen los mexicanos para erradicar la impunidad. México necesita un cambio de fondo a través de una reforma efectiva en los sistemas de policías de los tres órdenes de gobierno, en la procuración e impartición de justicia y, en general, en todo aquello que garantice el acceso de las personas a un sistema en el que se cumpla la ley, se proteja a las víctimas del delito, y se procese y castigue a los delincuentes conforme a derecho.

Bajo el orden actual, la democracia, el desarrollo humano y la prosperidad en condiciones de mayor equidad social están gravemente amenazadas en nuestro país por la ausencia de un efectivo imperio de la ley que permita la convivencia armónica de los mexicanos. Por lo anterior, tres son los grandes objetivos humanistas que integran un panorama de imperativos nacionales en materia de justicia y convivencia nacional:

- I. El impostergable objetivo de recuperar la paz para la convivencia en todas sus formas y dar un sentido de verdadera seguridad a las familias y a las personas, en su integridad física y en su patrimonio.

- II. El imperativo de que los derechos humanos de todas y todos sean verdaderamente cumplidos y respetados, y en su caso, que las personas cuenten con

los recursos para defenderse y para obligar al Estado a respetarlos, así como para que les sean resarcidos los daños que los actos u omisiones del Estado les generen.

III. La necesidad de lograr una procuración e impartición de justicia que responda a los niveles alarmantes de impunidad que vive nuestra sociedad.

Derechos y libertades

Los derechos fundamentales de los mexicanos deben ser ejercitables en todo momento y no pueden estar sujetos a la discrecionalidad y arbitrariedad de las autoridades o de terceros, como tampoco pueden estar condicionados por omisiones en la acción oportuna y expedita de quienes están responsabilizados de hacerlos valer. En ocasiones, que lamentablemente no son pocas, son las mismas autoridades quienes carecen de la cultura de la legalidad necesaria para respetar e identificar claramente los derechos que están afectando, dejando en un estado de indefensión a quienes aspiran a ejercer sus legítimos derechos.

México aún padece de prácticas inaceptables de violaciones a los derechos humanos, las cuales se agravan en contextos donde la marginación y el clima de violencia generado por el actuar del crimen organizado impide el ejercicio pleno de la acción del Estado. La desaparición forzada de personas, la tortura, los homicidios múltiples que nunca son juzgados, entre otros, son claros indicios de una situación inadmisibles que no puede seguir siendo ignorada, aunque el gobierno pretenda ocultar y minimizar su presencia en la vida nacional.

Es fundamental avanzar en el fortalecimiento de las instituciones, el Estado de derecho y la cultura de la legalidad. Durante los gobiernos de Acción Nacional, a la vez que se enfrentó sin miramientos al crimen organizado, se avanzó en la implantación de los sistemas y modelos que facilitarían el acceso a la justicia y a la defensa cabal de los derechos. Ese cambio institucional no ha recibido en este gobierno la atención y cuidado que eran necesarios para acelerar y fortalecer su implantación. Para los partidos coaligados es fundamental recobrar el ritmo y acelerar la marcha para empezar a ver los frutos de las reformas y cambios introducidos cuando fuimos gobierno. Considerado lo anterior, proponemos:

3.1 Reformar el artículo 1º de la Constitución para que ésta reconozca la dignidad de los seres humanos, la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, así como los derechos y garantías de los mexicanos como naturales y anteriores al orden jurídico. Éstos deberán ser respetados por el Estado en cualquier circunstancia, aun cuando no estén contemplados explícitamente en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos.

3.2 Reformar el artículo 1º de la Constitución para garantizar los derechos humanos y en caso de violación de los mismos, la reparación oportuna por parte del Estado mexicano.

3.3 Reformar el artículo 2º de la Constitución para garantizar el derecho a la vida de todos los mexicanos desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, de tal suerte que el Estado mexicano se obligue a proteger la vida por todos los medios a su alcance.

3.4 Adicionar el artículo 102, apartado B, de la Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de citar a comparecer a los titulares del poder ejecutivo a nivel estatal cuando se presenten violaciones graves a los derechos humanos.

3.5 Reformar la Constitución para dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de atracción, ya sea por oficio o a petición de parte, en los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades estatales.

3.6 Eliminar la prohibición constitucional que impide a las comisiones de derechos humanos pronunciarse sobre violaciones del Poder Judicial de la Federación, permitiendo que emita recomendaciones generales sin pronunciarse sobre casos específicos.

3.7 Modificar la Constitución y la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para establecer visitadurías adjuntas en los centros de reclusión, para prevenir y atender de manera oportuna violaciones a derechos humanos de víctimas e inculpados. En este mismo sentido, se obligará a las comisiones estatales a establecer visitadurías adjuntas en los centros de reclusión estatales.

3.8 Reformar el artículo 2º de la Constitución para que los organismos de derechos humanos puedan sancionar a aquellos servidores públicos que no acaten sus recomendaciones.

3.9 Reformar el artículo 16 de la Constitución para regular la figura del arraigo bajo los estándares de protección de los derechos humanos y del debido proceso.

3.10 Reformar los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado B, fracciones III y V; apartado C, fracción V; 29, segundo párrafo y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para emitir una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, de acuerdo con la iniciativa presentada en el Senado de la República en noviembre del 2014.

Sistema de procuración de justicia

Si bien es cierto que en materia federal los avances en los sistemas de procuración e impartición de justicia han sido sustanciales, su implementación y homologación en los estados sigue rezagada y es desigual en cuanto a su cabal implementación. Aun reconociendo la reforma al sistema penal como modelo de referencia respecto a los avances en la materia, es evidente que existe una necesidad imperiosa de fortalecer instituciones, racionalizar los esfuerzos y generar intervenciones que aceleren los procesos de cambio y le garanticen a los mexicanos el acceso a la justicia.

3.11 Reformar el artículo 21 de la Constitución para establecer que el Estado mexicano reconozca la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en términos de lo dispuesto en el Estatuto de Roma.

3.12 Establecer las bases constitucionales y legales para la creación de una Ley General de Procuración de Justicia, que establezca estándares para el fuero común y federal, y se logre:

- Implantar un Sistema universal de recepción de denuncias, independientemente del fuero y especialidad, para fortalecer la cultura de la denuncia.
- Homologar el salario y la capacitación de fiscales, agentes del ministerio público y peritos, con funcionarios equiparables del Poder Judicial de la Federación, para reducir el número de averiguaciones previas con deficiencias desde su integración.
- Incrementar el número de fiscalías en proporción a la incidencia delictiva. Establecer
- mecanismos de participación de víctimas en la procuración de justicia, permitiendo el acceso al expediente a fin de colaborar con el análisis de las pruebas y facilitar el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
- Crear mecanismos para que los ciudadanos colaboren en la observancia del trabajo objetivo de los ministerios públicos.
- Establecer un sistema de coordinación entre ministerios públicos federales, agencias de ministerios del fuero común y síndicos procuradores para construir fuentes avanzadas de información sobre el delito, y para desarrollar sinergias institucionales entre los diferentes niveles del ministerio público.
- Facilitar la adquisición, préstamo e intercambio de tecnología entre policías y procuradurías, para la óptima investigación de los delitos.

Sistema de impartición de justicia

Debemos avanzar de manera decidida hacia la construcción de un sistema integral de instituciones que permita el acceso de todos a la justicia. Se trata no sólo de un sistema en el que los jueces puedan ejercer un poder real más allá de la influencia de cualquier poder fáctico, sino un sistema en el que se van proveyendo los elementos técnicos de procedimiento e información para aumentar significativamente las capacidades del sistema de justicia.

3.13 Reformar el artículo 22 de la Constitución para que la extinción de dominio sólo proceda en caso de enriquecimiento ilícito.

3.14 Reformar el artículo 100 de la Constitución para establecer que los requisitos para poder ser designado Consejero de la Judicatura Federal, sean los mismos que para ser designado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

3.15 Reformar el artículo 104 de la Constitución para establecer la competencia exclusiva de los tribunales federales en controversias en materia mercantil cuando estén involucradas instituciones de crédito.

3.16 Modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para hacer efectiva la rotación de los jueces en el poder judicial, con el objeto de evitar lazos de complicidad y corrupción.

Sistema de justicia penal

La reforma del sistema penal en México es una de las reformas más profundas e importantes para la vida nacional, y uno de los legados más importantes de las administraciones panistas.

No obstante, el avance en su implementación es muy desigual desde la perspectiva regional, pero también en cuanto a los diferentes aspectos que tienen que funcionar de manera armónica para su cabal implementación.

Por lo anterior, debemos promover medios e incentivos para impulsar y vigilar la implementación plena de la reforma penal acusatoria, poniendo especial énfasis en que los gobiernos y congresos locales realicen las modificaciones a sus legislaciones para la completa adaptación de la reforma, y que aceleren la implantación de las debidas prácticas, procesos e instancias necesarias que permitan a los ciudadanos acceder en el menor tiempo posible a los beneficios que representa el nuevo sistema.

3.17 Es necesario que el Sistema de Atención a Víctimas mejore sustancialmente para poder resarcir a las víctimas de manera adecuada y expedita. Es necesario crear nuevos centros de atención y fortalecer el marco legal para que este sistema funcione correctamente y para implantar procedimientos más ágiles y humanos que permitan atender debidamente y garantizar el pleno derecho de las víctimas del delito.

3.18 Promover las iniciativas para resolver los problemas de implementación del sistema penal oral acusatorio que ya son evidentes en algunos estados. Lo anterior con el ánimo de fortalecer este sistema y que muestre con ello los avances necesarios para su cabal implementación en el año 2016.

3.19 Introducir reformas para perfeccionar y hacer cumplir la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Sistema nacional de policías

Los avances en la profesionalización y certificación de las policías continúan con un inadmisibles rezago que afecta seriamente la capacidad del Estado para enfrentar a los delincuentes, especialmente al crimen organizado, y no permite generar cambios visibles para garantizar la seguridad de los mexicanos. Es fundamental actuar legislativamente para acelerar los mecanismos y procesos necesarios para contar con policías confiables y capaces.

Pese a la gravedad que implica el deterioro de las policías en localidades donde el crimen organizado las ha cooptado mediante la corrupción y la amenaza, es inadmisibles el intento del gobierno por suprimir permanentemente las policías municipales bajo ese pretexto. Por el contrario, es fundamental realizar los esfuerzos para rehabilitar el tejido institucional de los poderes locales, fortalecer sus capacidades para enfrentar a los criminales y garantizar

la cercanía y participación activa de los ciudadanos para el restablecimiento de la confianza en las instituciones del Estado.

Cuando sea necesaria la intervención de la Federación, debe quedar claro que no se pueden abrogar los derechos y facultades fundamentales de los municipios y los poderes locales, sino sólo intervenir de manera transitoria y subsidiaria, con el objetivo expreso de fortalecer y restituirle sus capacidades básicas de proteger la integridad personal, la propiedad y las libertades necesarias para el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, proponemos:

3.20 Promover las reformas necesarias para consolidar un nuevo Sistema de Policía Nacional, basado en una sola instancia nacional con atribuciones de control, seguimiento y en caso de ser necesario, y de acuerdo con la ley, de intervención operativa, que en todos los casos deberá realizarse de manera subsidiaria y temporal, y sólo cuando las policías locales fallen en su encargo de velar por la paz y la seguridad de los ciudadanos. Esta instancia será directamente responsable de la homologación operacional, de la profesionalización y el establecimiento de los controles de confianza, del reclutamiento adecuado, de la formación, entrenamiento y supervisión de todos los elementos de seguridad pública, y fungirá como órgano de certificación y soporte institucional y subsidiario de todas las policías municipales y estatales.

3.21 Realizar las reformas necesarias para redefinir y hacer efectivo el mando único como mecanismo subsidiario que respete las atribuciones constitucionales de los municipios en materia de seguridad. Las reformas deberán contemplar mecanismos institucionales para fortalecer las capacidades de los municipios. La intervención directa y exclusiva de las autoridades estatales en la seguridad pública de los municipios se realizará sólo en aquellos municipios que carezcan de los recursos y capacidades para proveer el servicio de seguridad pública.

BIENESTAR Y SEGURIDAD SOCIAL UNIVERSAL

Los gobiernos de Acción Nacional alcanzaron logros notables en materia de bienestar para los mexicanos, a pesar de la recesión económica mundial de 2009 y de las limitaciones impuestas por la mezquindad priista que impidió la aprobación de las reformas estructurales que el PAN impulsó. Ahora, debemos seguir avanzando especialmente frente a los retos que implica alcanzar la seguridad universal que supone la plena cobertura de las poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres solteras, indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta vulnerabilidad y riesgo.

Como gobierno logramos avances sin precedentes en materia de salud, vivienda, calidad de vida y abatimiento de la pobreza extrema, gracias a que forjamos un círculo virtuoso que comenzó con políticas públicas eficientes, transparentes y responsables, para generar crecimiento económico y que, al mismo tiempo, se tradujo en programas sociales que

redistribuyeron la riqueza, fomentaron el desarrollo integral de la persona y procuraron justicia social en un ambiente de solidaridad y subsidiariedad para lograr el bien común. Avanzamos en promover una idea del desarrollo social centrada en promover una sociedad más igualitaria y equitativa cuyo elemento distinto fuera el respeto a la dignidad de las personas.

Ante un México donde aún persiste la pobreza, en donde los gobiernos anteriores sólo buscaron callar con clientelismos las voces que demandaban justicia social, en doce años, se ofreció a las familias mexicanas acciones que ponían por encima de todo la dignidad de la persona humana y que realmente combatieran la pobreza, dándoles más oportunidades de desarrollo. Uno de los mayores aciertos de los gobiernos panistas fue blindar la estrategia de combate a la pobreza y la política social en general de los fines electorales; esto se vio reflejado en la creación de instituciones como el CONEVAL, que por medio de criterios académicos rigurosos y transparentes ha evaluado los alcances, limitaciones y logros de los diferentes programas. Es por ello que debe de seguirse insistiendo en una cultura de evaluación y focalización que permita optimizar los recursos destinados a programas sociales, así como su efectividad.

Construimos un México más justo, con políticas sociales integrales y de largo alcance como Oportunidades o Apoyo familiar, que fueron el soporte de casi 6 millones de familias que viven en pobreza y que se sabían protegidas por la acción subsidiaria y solidaria de su gobierno.

En las administraciones federales de Acción Nacional empoderaron a la mujer desde su niñez al reducir la brecha de género en la educación y beneficiándola con el Programa Oportunidades. También contribuimos a reducir la brecha étnica, porque las niñas indígenas que eran beneficiarias de Oportunidades tenían casi un año más de escolaridad que las que no eran beneficiarias del programa.

Construimos las bases para un sistema de salud universal, con el fin de tener mexicanos más sanos gracias a la creación del Seguro Popular, para que el nivel de vida de los ciudadanos mejore día con día y su salud no sea un freno para su desarrollo.

Contando con estos logros alcanzados, renovamos nuestra convicción para seguir trabajando en la construcción de un país más justo, que le brinde igualdad de oportunidades a las y los mexicanos, y que en cada etapa de su vida les garantice acceso a la seguridad social universal y a la plena cobertura de las poblaciones más vulnerables: niños, adultos mayores, madres solteras, indígenas, trabajadores y familias en condiciones de alta precariedad y riesgo.

También es imperativo que se siga garantizando la aplicación de programas sociales que, en vez de generar dependencia, le brinden a cada mexicana y mexicano los elementos necesarios para alcanzar su pleno desarrollo.

Combate a la pobreza y desarrollo humano

El 52% de la población mexicana se encuentra en situación de pobreza y no cuenta con los elementos necesarios para lograr su pleno desarrollo. Además, la desigualdad en México se percibe en que los hogares que más ganan, lo hacen 78 veces más que en las viviendas que menos ingreso reciben, teniendo como consecuencia que más del 35% de la población se endeude para cubrir sus necesidades básicas.

Ante esta realidad, refrendamos nuestro compromiso con las familias mexicanas para seguir construyendo un México más justo y con igualdad de oportunidades para todos, en el que las políticas públicas para combatir la pobreza sean incluyentes, responsables y lleguen de manera efectiva, transparente y solidaria a quienes más lo necesiten. Por ello, para redistribuir la riqueza, generar capital humano y combatir la pobreza, proponemos:

Familias mexicanas con desarrollo integral

4.1 Reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el Estado y la sociedad protejan la organización y el desarrollo de la familia como elemento fundamental de la sociedad.

4.2 Adicionar el artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia de adopción de forma concurrente, lo que permitirá armonizar las diversas disposiciones normativas en la materia, permitiendo así la uniformidad y la homologación de legislaciones, criterios técnicos y administrativos a nivel nacional.

4.3 Presentar una iniciativa sobre Paternidad Responsable que incluya el Registro Público Nacional de Deudores de Pensión Alimentaria; que fomente una paternidad afectiva y responsable que impulse una mayor participación de los hombres en el ámbito familiar desde la gestación, la crianza y el desarrollo, hasta la educación de las hijas e hijos.

4.4 Reformar la Ley de Asistencia Social para facultar al Sistema Nacional DIF como un órgano generador de políticas públicas transversales que promuevan el fortalecimiento integral de la familia.

Combate a la pobreza

4.5 Reformar la Ley del CONEVAL con el objetivo de facultarlo para evaluar las políticas y los programas sociales estatales y municipales, a efecto de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y tener un conocimiento riguroso de sus alcances e impacto.

4.6 Proponer una iniciativa de Ley para Garantizar el Derecho a la Alimentación, tal como lo recomiendan los acuerdos y organismos internacionales, a fin de generar un impacto positivo en la promoción del acceso al derecho a la alimentación en nuestro país.

4.7 Reformar a la Ley de Coordinación Fiscal para dotar al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de mecanismos de evaluación, que consideren criterios

de pobreza y desigualdad a efecto de eliminar las inequidades que genera la fórmula vigente de distribución de recursos hacia estados y municipios.

4.8 Reformar la Ley General de Desarrollo Social a fin de establecer mecanismos de control para la adecuada focalización de los programas sociales, con la finalidad de que no se conviertan en instrumentos de clientela política.

Seguridad social y salud universal

Reconociendo la importancia que tiene el bienestar para el pleno desarrollo de las familias mexicanas, los gobiernos de Acción Nacional sentaron las bases para lograr la cobertura universal de salud, consiguiendo que de 2000 a 2010 la población con acceso a servicios de salud subiera de 39 a 72.5 millones de personas, gracias, entre otras acciones, a la creación del Seguro Popular, que para 2010 cubría a alrededor de 42 millones de mexicanos.

Estos logros fueron posibles debido a políticas públicas panistas con visión de largo plazo, así como a finanzas públicas sanas y responsables para sanear los sistemas de salud en México. Sin embargo, a pesar de los logros antes mencionados y de que millones de familias mexicanas se han visto beneficiadas con programas de seguridad social implementados por el PAN, el rezago de años anteriores fue difícil de eliminar, por lo que todavía es necesario seguir trabajando para terminar el saneamiento de los sistemas de salud, para hacerlos sostenibles y refrendar una política de largo plazo que también coadyuve a mejorar la atención, la cobertura y los servicios que se les presta a los usuarios.

Del mismo modo, debemos trabajar para dar respuesta a retos urgentes que, de no actuar con prontitud, afectarán a millones de mexicanas y mexicanos en un futuro cercano, principalmente porque vivimos una transición epidemiológica que se caracteriza por el predominio de las enfermedades crónicas cuya atención médica, a causa del cambio en la distribución de la población por edades, se ha vuelto más costosa y ha mermado las finanzas de las instituciones.

Además de la sostenibilidad, la cobertura y la calidad de los servicios en los sistemas de salud, también debemos continuar los esfuerzos para mejorar el sistema de pensiones y garantizar una vida plena para los jubilados y adultos mayores, porque cinco de cada diez mexicanas o mexicanos no sabe de qué va a vivir en la vejez. Así, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) debe garantizar que el ahorro de los trabajadores mexicanos sea administrado de forma eficiente, con los mayores rendimientos y cuidando el nivel de riesgo en las inversiones de los fondos para el retiro.

De este modo, hacemos las siguientes propuestas con la finalidad de brindarle a las y los mexicanos servicios de salud de calidad, lograr la cobertura universal y garantizar que las pensiones representen la tranquilidad de los pensionados en vez de una preocupación:

Servicios de salud de calidad

4.9 Reformar la Ley General de Salud y las distintas leyes de seguridad social para garantizar que la cobertura de los servicios de salud sea universal, que se puedan

recibir en cualquier establecimiento de atención médica de los diferentes sistemas, y los mecanismos para que estos servicios converjan en estándares de calidad homogéneos.

4.10 Reformar la Ley General de Salud para establecer el Consejo Nacional contra la Obesidad y las Enfermedades Metabólicas.

4.11 Reformar la Ley General de Salud para fortalecer mecanismos de prevención y atención de las enfermedades mentales.

4.12 Reformar la Ley General de Salud para facilitar un esquema de coordinación y de alianzas público-privadas con la industria farmacéutica, para mejorar la provisión de medicamentos en todas las regiones del país y el abasto suficiente de material de curación en las unidades de atención.

Seguridad social incluyente

4.13 Promover un marco legal en materia de seguridad social universal a través del cual se garantice una vida digna a las y los mexicanos, y que al mismo tiempo privilegie finanzas públicas sanas y responsables con una perspectiva de largo plazo.

4.14 Reformar la Ley General de Salud para ampliar los objetivos del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, para que a través de éste también se proporcione un esquema de financiamiento bipartita para la obtención de una pensión de retiro para los 28.6 millones de trabajadores independientes, así como seguros de viudez y orfandad para sus dependientes económicos, entre otros posibles beneficios relacionados con la seguridad social.

4.15 Presentar una iniciativa para expedir para Ley del Seguro Nacional de Desempleo.

4.16 Introducir las reformas necesarias a las distintas leyes de seguridad social correspondientes para generar la protección social integral de los jornaleros agrícolas y sus familias.

Grupos vulnerables

Lo comprendemos que la situación de vulnerabilidad de las mexicanas y los mexicanos lastima a sus familias y nos debilita como nación, por ello, reconocemos que es necesario atender a las poblaciones vulnerables o que necesitan un apoyo extra para salir adelante, tomando en cuenta las distintas etapas de la persona, desde su gestión hasta su muerte natural, para que así tengan una vida plena y con acceso equitativo e incluyente a oportunidades desarrollo.

En el caso de la niñez mexicana, vemos con preocupación que sólo el 12% de la población infantil recibe plenamente servicios públicos, 16% de los niños menores de 5 años vive en condiciones de hacinamiento, 38% de los niños menores de 2 años tiene anemia, 13.6% de los niños menores de cinco años presenta desnutrición crónica y el 56% de los niños

menores de 5 años vive en pobreza. Cada dos días muere por homicidio/maltrato infantil un niño menor de 4 años y más del 20% de los niños que asiste a preescolar en zonas marginadas no adquiere habilidades básicas de lenguaje y pensamiento matemático.

Sin embargo, el escenario no es más alentador con poblaciones adultas, porque en el caso de las comunidades indígenas, vemos que por cada 100 personas que son hablantes de lenguas indígenas, hay 97 que son pobres o vulnerables por alguna de las carencias sociales. Por otro lado, con los adultos en plenitud, en 2013 el porcentaje de personas mayores a los 60 años en situación de pobreza y que presentan carencia por acceso a los servicios de salud, representó el 20.9% de la población.

Al tener esta perspectiva de largo plazo y de acuerdo con las etapas de la vida, sabemos que hay un amplio espectro poblacional, de diversas características y necesidades específicas, a quienes nos tenemos que dirigir tomando en cuenta a la infancia, a las mujeres, a los adultos mayores, a las personas con cualquier tipo de discapacidad y hasta a la población migrante, ya que por su condición de pobreza o movilidad se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Por ello es que trabajaremos para lograr las siguientes propuestas:

Niñas y niños

4.17 Presentar una iniciativa de Ley de adopción que incluya mecanismos para unificar los criterios en las legislaciones locales, acortando así los tiempos en el procedimiento y medidas de coordinación entre todas las instancias relacionadas con la materia.

4.18 Reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de promover la implementación del modelo de Centros Incluyentes de Atención Integral para niñas, niños y jóvenes con todo tipo y grado de discapacidad.

4.19 Reformar la Ley Federal del Trabajo para elevar las sanciones a las personas que violen las disposiciones en materia de trabajo infantil, de acuerdo con lo ratificado en los convenios internacionales.

4.20 Reformar la Ley Federal del Trabajo para prohibir el despido de una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambiar de estado civil o por tener que ausentarse del trabajo para el cuidado de hijas e hijos que aún no hayan cumplido 18 años.

4.21 Promover la creación de la Ley de Combate a la Violencia Infantil y Juvenil, que defina el marco para la prevención, erradicación de prácticas violentas, para la intervención de las autoridades y para las sanciones en caso de omisión. Una ley que establezca la obligación de las autoridades al desarrollo de campañas educativas y publicitarias dentro de las escuelas para prevenir la violencia juvenil, así como la obligación de dar seguimiento y generar información sobre este fenómeno social.

Jóvenes

4.22 Impulsar la aprobación de la Minuta que reforma al artículo 4° de nuestra Constitución, que establece el derecho de la juventud al desarrollo integral, con el objetivo de alcanzar la protección efectiva de las garantías reconocidas en la Carta Magna.

4.23 Proponer diversas alternativas dentro de la Ley del Servicio Militar para que los jóvenes puedan optar también por un servicio cívico, social y comunitario, preferentemente en zonas marginadas.

4.24 Reformar la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para incluir entre las atribuciones del Instituto, la posibilidad de impulsar la conformación y operación del Sistema Nacional de Información y Consulta que comprenda, entre otras cosas, la incorporación y homologación de criterios de juventud en los distintos sistemas nacionales de estadística y el diseño de criterios cualitativos que permitan evaluar tanto el nivel de bienestar de la juventud, como el grado de cumplimiento de sus derechos.

4.25 Fomentar la cultura del ahorro entre los jóvenes mediante la adecuación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, con el objetivo de mejorar los esquemas que apoyen a los jóvenes ahorradores con créditos accesibles para la adquisición de una primera vivienda, para integrar una empresa y para acceder a créditos educativos con tasas bajas de interés.

Equidad de género

4.26 Reformar el apartado “A” del artículo 123 constitucional para establecer el derecho al servicio de guarderías para las mujeres y los hombres trabajadores por igual.

4.27 Reformar la Ley General del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para considerar a la violencia contra la mujer como información de interés nacional.

4.28 Promover estímulos fiscales a las empresas que contraten mujeres para desempeñar tareas mediante esquemas de teletrabajo, especialmente las que requieran atender a familiares en sus hogares.

Personas con discapacidad

4.29 Reformar el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de establecer que el Estado promueva los medios para el tratamiento, rehabilitación e integración al desarrollo en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

4.30 Reformar la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el fin de promover la creación de instituciones y escuelas especializadas en apoyar a las personas con algún grado de discapacidad, que permita su inclusión y apoye su rehabilitación.

4.31 Reformar el marco jurídico para incorporar garantías de accesibilidad universal a espacios físicos, servicios públicos, medios de transporte, de comunicación y tecnologías de la información, para que los jóvenes con discapacidad se incorporen y participen en la vida económica, social, y cultural. medios alguna política

4.32 Legislar para sentar las bases de un Programa de Estancias para personas con alguna discapacidad.

Comunidades indígenas

4.33 Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para cada instancia de gobierno asuma su responsabilidad respecto al desarrollo de la población indígena, conforme al sentido del artículo 2° constitucional. que

4.34 Reformar el marco legal para asegurar el pago de servicios ambientales a las comunidades indígenas que se encuentran en el bosque.

4.35 Reformar el marco legal para fortalecer los servicios educativos en comunidades indígenas a través de programas de educación media superior y superior para jóvenes indígenas, con programas especiales de educación intercultural bilingüe, de alfabetización y en especial de capacitación productiva y tecnológica. las

4.36 Modificar la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que asuma gradualmente una función reguladora vigilante del respeto a los derechos de los indígenas, con el fin de que convertida en un órgano de investigación, estudio, propuesta, consulta y difusión que genere criterios para el desarrollo. y quede

Migrantes

4.37 Legislar para que los recursos destinados a proteger a la población migrante en territorio mexicano se ejerzan de manera responsable y se vinculen principalmente al servicio de la persona, para así dar la garantía nuestros connacionales de que en su regreso a México, sea voluntario por repatriación, las dependencias del Gobierno Federal los atenderán de manera digna, viendo por su bienestar físico y psicológico. a

4.38 Incluir sanciones en la legislación del sistema financiero mexicano a quienes alteren el monto de las remesas abusando en el tipo de cambio ofrecen a los que reciben el dinero. que

4.39 Legislar para que quienes reciben una cantidad comprobable y estable de remesas de forma periódica y tengan necesidad de comprobar ingresos, puedan optar para que éstas cuenten como comprobante de los mismos sin que implique responsabilidad impositiva.

Adultos mayores

4.40 Adicionar la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal para que esta entidad promueva, coordine y supervise un sistema nacional de hipotecas inversas o reversibles, con objeto de que los adultos mayores tengan una opción para rentabilizar su patrimonio inmobiliario.

4.41 Reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para fortalecer los mecanismos de atención jurídica, salud y asistencia, así como crear los mecanismos que sancionen el abandono, discriminación y violencia contra los adultos mayores.

CONOCIMIENTO Y FORMACIÓN PARA LA PROSPERIDAD

Una nación próspera requiere del esfuerzo y talento creativo de todos los mexicanos. Los rezagos en materia de cobertura, calidad e infraestructura en todos los niveles de enseñanza y desarrollo de conocimiento siguen siendo una asignatura pendiente para el Gobierno Federal y para los gobiernos estatales.

Durante las administraciones panistas se sentaron las bases para la reforma educativa que formó parte sustancial del Pacto por México: alcanzar el 100% de la cobertura en educación básica, duplicar la infraestructura en educación media superior, alcanzar una cobertura sin precedentes en materia de becas en todos los niveles y lograr importantes acuerdos en materia de evaluación de la calidad y mejora curricular fueron logros que marcaron el camino a seguir. No obstante, la realidad de la educación y de la producción de conocimiento en México dista enormemente de lo que sería necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo material y espiritual de la nación.

Aunque la reforma educativa de 2013 consagró en la Constitución demandas históricas y políticas aplicadas, sigue siendo prioritario redoblar esfuerzos y defender una reforma que el gobierno priista no ha sabido ejecutar a cabalidad.

Desde hace 11 años Acción Nacional hizo énfasis en la necesidad de un enfoque más integral para la educación de la población en edad escolar, así como para la población adulta. Por lo mismo, hemos impulsado leyes y programas para el desarrollo de habilidades y aptitudes relacionadas con el liderazgo, la tolerancia, la creatividad y el espíritu emprendedor. En este sentido, hemos sido congruentes con nuestra idea de promover el desarrollo humano sobre la base de valores centrados en el desarrollo integral de la persona. Es fundamental que no se dé marcha atrás a las reformas e instituciones que promovimos para alcanzar este importante objetivo.

La educación en valores es un tema que debe tocar transversalmente todas las políticas públicas en materia de desarrollo de capacidades y de conocimientos. Por ello ha sido vital continuar nuestra lucha para que desde la Ley General de Educación se integre en todos los niveles y ámbitos del sistema educativo nacional, la formación en valores cívicos y éticos como instrumento esencial para la transformación integral de la sociedad mexicana, que

promueva la tolerancia y el combate a la discriminación, la cultura de la legalidad, el conocimiento profundo de los derechos fundamentales y el desarrollo de las capacidades para que las personas puedan garantizar su pleno ejercicio.

La educación superior y la investigación científica y tecnológica deben de ir de la mano en cuanto a la generación de capacidades nacionales en materia de conocimiento. En ambas materias es fundamental avanzar hacia un acuerdo nacional que nos permita introducir una reforma de fondo orientada claramente a elevar el desempeño nacional en producción de ciencia básica, aplicada y para la innovación, así como para la formación de cuadros profesionales, técnicos y científicos al más alto nivel, especialmente bajo esquemas que respondan a la demanda efectiva y potencial de las industrias y servicios intensivos en conocimiento y de los centros de investigación aplicada y avanzada. Es fundamental que se definan acciones prioritarias nacionales más allá de las declaraciones programáticas y las buenas intenciones, por lo que será necesario generar una instancia independiente que le dé seguimiento puntual a esta política, que evalúe la efectividad y eficiencia de las acciones emprendidas, y que emita recomendaciones para su mejora continua.

La distribución desigual en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación es una condición que está contribuyendo a ampliar las brechas sociales y económicas existentes. Significa una pérdida de oportunidades para el desarrollo de las personas y para la construcción del bien común. Durante los gobiernos de Acción Nacional, México fue uno de los países que se sumó de manera decidida a impulsar las mejores prácticas globales en materia de sociedad de la información. Ya en la oposición, nuestro Partido asumió el liderazgo para la aprobación de la reforma estructural en el marco regulatorio de las telecomunicaciones. No obstante, es evidente que sin las acciones gubernamentales y el soporte de un marco legislativo proactivo que demuestren en los hechos un compromiso real con la letra de la Constitución, el país no podrá avanzar en reducir la brecha digital y abatir la pobreza digital en la que vive gran parte de las poblaciones más desfavorecida del país.

Por más Educación de calidad para todos

Partiendo de lo establecido por el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos que la educación debe ser la base de toda sociedad, para lograr un mejor país, por esa razón proponemos las siguientes líneas de acción temáticas, partiendo previamente de un diagnóstico.

Diagnóstico

Insistimos en la importancia de situar a la educación y a los educadores como el punto de partida para la obtención del desarrollo económico y la seguridad social. La educación es la herramienta probada para recuperar los valores cívicos, la cooperación social, la legalidad y la seguridad. La educación hace posible la movilidad social, iguala las oportunidades, garantiza el ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos y la realización del bienestar.

México enfrenta grandes retos, como es el acceso a la educación básica de grupos vulnerables, la deserción en secundaria, la cobertura en nivel medio superior y superior, las condiciones de la infraestructura y equipamiento, la formación continua del docente y como resultado multifactorial, un bajo logro académico de los estudiantes.

Las políticas públicas en materia de educación deben tener en el centro al alumno y a la escuela como el receptor de todos los esfuerzos presupuestales. Asimismo, es imprescindible mantener la defensa del conjunto de derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de los trabajadores de la educación, empleando todo los medios legales y las formas legítimas de acción sindical; destacadamente la defensa y aseguramiento de la estabilidad laboral, garantizando al magisterio una plataforma que responda a sus necesidades de superación profesional.

Líneas de acción temáticas

Niñez y juventud centro de la política educativa

Consolidar los programas de apoyos e incentivos para fortalecer el ingreso y permanencia de la niñez mexicana en el sistema educativo.

Impulsar la autonomía de gestión escolar, dotando a las escuelas del presupuesto suficiente para atender las necesidades de la comunidad escolar.

Fortalecer los programas de educación indígena, asegurando además de la calidad educativa en sus lenguas nativas, la inclusión social y los apoyos que aseguren su permanencia en el sistema educativo y el acceso a las oportunidades de superación en igualdad de condiciones.

Ampliar la cobertura y calidad de la educación inicial y preescolar para cumplir con un derecho de la niñez y potenciar su desarrollo integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas.

Promover la actualización constante y permanente de planes y programas de estudio de educación básica para integrar las nuevas competencias que se requieren de las y los alumnos.

Formación

Revisar la formación inicial docente, el sistema de actualización y profesionalización de las maestras y maestros; así como el financiamiento educativo dirigido a cubrir las necesidades de los estudiantes y maestros.

Fortalecer el sistema de estímulos al personal docente, considerando la actualización constante y la planeación educativa.

Constituir un sistema educativo en el que el reclutamiento competitivo, la capacitación y la evaluación, se traduzcan en un esquema de mejora continua y de incentivos de remuneración que garanticen una carrera profesional altamente solvente y estimulante para los docentes.

Infraestructura y equipamiento

Dotar a todas las escuelas de infraestructura e instalaciones dignas y completas. Es necesario hacer especial énfasis en la situación de las llamadas escuelas multigrado y seguir trabajando y fortaleciendo el esquema de las Escuelas de Tiempo Completo.

Implementar sistemas de educación basados en el uso de nuevas tecnologías, que permitan maximizar el potencial de las habilidades humanas y materiales didácticos involucrados en el proceso educativo.

Normales

Adecuar el presupuesto, los planes y programas de estudio de las escuelas normales, con especial atención a las rurales, para hacer frente a los nuevos desafíos que plantea en la actualidad la educación básica.

Educación media superior

Fortalecer la cobertura educativa en las entidades federativas que presentan mayor rezago de inserción en el nivel medio superior.

Fortalecer los programas de seguimiento educativo para identificar y abatir las principales causas de deserción escolar en el nivel medio superior.

Diseñar planes y programas de estudio de nivel medio superior flexibles, que se adapten no solamente a las demandas de los sectores productivos, sino al perfil vocacional de cada estudiante.

Ciencia y educación superior

Consolidar a las universidades públicas como centros de desarrollo científico e innovación tecnológica. Fortalecer la formación y desarrollo de investigadores, innovadores y divulgadores de la ciencia y la tecnología en el seno de las instituciones de educación superior del país.

Arte y deporte

Consolidar los programas de generación cultural y artística, que fomenten la paz y el desarrollo armónico de la sociedad mexicana.

Consolidar los programas de recuperación de espacios públicos para transformarlos en espacios óptimos y seguros para la práctica deportiva.

Arte y cultura

La promoción de las expresiones culturales y artísticas debe recibir una atención prioritaria en todos los niveles de gobierno y debe abarcar de manera igualitaria a todas las regiones del país. Siguen existiendo enormes desigualdades a nivel regional y entre sectores poblacionales en el acceso a los recursos culturales, tanto en materia de consumo como en cuanto a los apoyos a creadores.

5.1 Proponer las reformas necesarias para que el arte, la cultura y la educación artística, a nivel de desarrollo de talento y apreciación, formen parte integral de la educación que deben recibir los mexicanos.

5.2 Otorgar incentivos fiscales bien diseñados para que particulares y organizaciones civiles impulsen la difusión de la cultura y generen apoyos para el desarrollo de talento y promuevan artistas y creadores.

5.3 Impulsar la aprobación de mayores recursos para incrementar las becas y apoyos a los jóvenes artistas y creadores que viven en las zonas marginadas.

5.4 Fortalecer las capacidades, recursos y competencias de las instituciones responsables de realizar acciones que fomenten la difusión y desarrollo del patrimonio y las expresiones artísticas y culturales de México y sus regiones, con el fin de consolidar nuestra imagen en el concierto internacional, identificando adecuadamente actividades de alto impacto, priorizando aquellas que promueven la participación de jóvenes artistas, creadores y talentos emergentes.

5.5 Fortalecer las atribuciones, recursos y competencias de las instituciones responsables de impulsar una mayor presencia de las artes en las escuelas públicas en zonas rurales y urbanas marginadas, especialmente en la educación básica, que permita fortalecer el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo cultural y de expresión artística de las comunidades marginadas.

Deporte y esparcimiento

La promoción de la cultura física y el deporte es un derecho constitucional que no ha recibido la atención necesaria para alcanzar su pleno ejercicio. No obstante, el país enfrenta una crisis seria de salud que obedece en parte a deficiencias en la promoción y pleno acceso a la infraestructura deportiva y recreacional. Es fundamental retomar con seriedad esta materia para garantizar este derecho y resolver de origen la crisis epidemiológica producto de los bajos niveles de actividad física de los mexicanos, especialmente en niños y jóvenes.

5.6 Reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para crear un verdadero Sistema Nacional para la Detección y Desarrollo de Talentos Deportivos que genere incentivos a los niños y jóvenes para destacar y para fortalecer sus capacidades y habilidades físicas y deportivas.

5.7 Realizar reformas legales orientadas a promover el deporte entre la infancia y juventud sin distinción de género. Apoyar el desarrollo del deporte en todos los sectores sociales, garantizar el desarrollo de la infraestructura deportiva en todas las regiones del país y apoyar el deporte de aficionados, especialmente a nivel de ligas locales urbanas y rurales; generar apoyos a las mismas para que contribuyan a programas de identificación y promoción de talentos deportivos desde edad temprana y durante todo su ciclo.

LA NACIÓN SUSTENTABLE

El reto de transformar a México supone también establecer una relación armoniosa con nuestro entorno natural, con planeación urbana acorde con el ordenamiento ecológico del territorio, así como el uso sustentable y responsable de nuestros recursos naturales y energéticos que garantice calidad de vida a los mexicanos de hoy y a las generaciones futuras.

La valoración de la biodiversidad y de los servicios eco-sistémicos es indispensable para pensar a México de una manera distinta, es decir, para reconocer que se puede tener un desarrollo humano sustentable que consista en establecer una relación armoniosa entre lo económico, lo social, lo técnico y lo ambiental; una visión que sólo puede alcanzarse mediante la construcción y amplia difusión de una verdadera cultura ambiental.

El crecimiento económico en las últimas décadas ha generado progreso, pero el patrón de consumo energético sustentado en combustibles fósiles también ha provocado cambios en los ciclos naturales y en los ecosistemas. La emisión de gases de efecto invernadero provoca el aumento de la temperatura de la atmósfera, ocasionando que los fenómenos meteorológicos sean más frecuentes y más severos (precipitaciones pluviales, sequías, inundaciones, huracanes, etcétera). Las zonas urbanas y rurales son afectadas principalmente por la falta de prevención y violaciones a la normatividad en la planeación territorial.

Por otro lado, el crecimiento económico que no está inscrito en el desarrollo sustentable sigue provocando el aumento en la generación de residuos, el consumo irracional del agua y de otros recursos naturales, lo que pone al país en un escenario de pasivos ambientales y de agotamiento de recursos que no están siendo debidamente atendidos.

Es fundamental transitar hacia a un nuevo modelo integral de desarrollo urbano, de ciudades humanas con calidad de vida, limpias, habitables y que contemplen el impacto de la movilidad y la problemática que causa el crecimiento poblacional, pero que sobre todo, sean humanamente sostenibles mediante una visión distinta del desarrollo que debe

permear todos los ámbitos de nuestra cultura y acción social y política. En este sentido, los partidos coaligados trabajarán para garantizar el derecho a vivir en ciudades humanas e incluyentes donde el centro del desarrollo sean las personas, quienes se verán beneficiadas con el desarrollo urbano, el tejido social y comunitario, haciendo posible la implementación de modelos de consumo colectivo y movilidad sustentables.

Por último, es necesario avanzar hacia una verdadera transición energética aprovechando el potencial que tiene nuestro país para generar energías limpias y renovables, a través de la Ley de Transición Energética presentada y promovida por el PAN. Del mismo modo, debemos permanecer vigilantes del cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Pacto por México en materia de energía y de que su materialización a nivel de políticas públicas respete la legislación aprobada en la materia.

Desarrollo urbano, metropolitano y movilidad

La población urbana en México representa casi un 80% de la población y uno de cada seis mexicanos viven en zonas metropolitanas. Las ciudades de México presentan un repertorio de problemas que deben ser atendidos de manera integral y con un enfoque que ponga en el centro la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales y los nuevos derechos que se derivan de la convivencia urbana, como son la calidad de vida, el derecho a la movilidad, a la seguridad, al acceso al espacio público, a un espacio de vida libre de contaminación, etc. Los temas de desarrollo urbano humano y sustentable representan una articulación fundamental que sintetiza nuestra lucha por la construcción del bien común, nuestra vocación municipalista y de fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos para transformar nuestra nación en una patria más humana, más digna y más solidaria.

Para alcanzar estos objetivos, buscaremos:

6.1 Promover un nuevo marco jurídico para el desarrollo urbano que permita a los centros urbanos del país evolucionar bajo un modelo de ciudades humanas y de calidad, que sea de carácter obligatorio en la integración de planes y programas, incluyendo los de las agencias de desarrollo metropolitano y para el desarrollo de infraestructura urbana, y observando de manera integral el espacio público, así como el manejo de residuos, agua y drenaje, transporte y movilidad, seguridad y manejo de riesgos, zonificación sustentable y la energía per cápita, anteponiendo los parámetros de sustentabilidad para preservar a nuestro planeta. Todo ello respetando el tejido de convivencia social y comunitario, y el desarrollo familiar y humano

6.2 Reformar los artículos 115 y 116 de la Constitución que permitan la creación de zonas metropolitanas que puedan a su vez constituir organismos de gestión metropolitana en materia de agua y drenaje, residuos, transporte y movilidad, seguridad, medio ambiente, desarrollo urbano y energía.

6.3 Promover la seguridad vial de los individuos con el objeto de reducir los decesos, lesiones y daños materiales que son generados por los accidentes viales en el marco de las leyes respectivas de movilidad y protección civil de competencia federal,

acompañada de un mecanismo para promover el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que ya existen en nuestro país.

6.4 Impulsar la creación de un Fondo en el Presupuesto de Egresos que otorgue recursos a las entidades federativas que favorezcan el desarrollo de infraestructura y coordinación interinstitucional para mejorar la movilidad de los ciudadanos de cada demarcación, con fomento a las alternativas de transporte colectivo y del no motorizado y un uso eficiente de los recursos públicos, privados y de los tres órdenes de gobierno.

6.5 Impulsar la creación de un Fondo dentro del Presupuesto de Egresos que fomente la sustitución de unidades vehiculares del transporte público de pasajeros en las entidades federativas, a fin de reemplazar el parque vehicular existente por unidades con tecnologías menos contaminantes, que cubran los estándares de seguridad, que sean más económicas y de alta capacidad.

6.6 Garantizar en la legislación correspondiente, que las inversiones del Gobierno Federal en movilidad correspondan a proyectos sustentables y mejoras del espacio público, fomentando la accesibilidad a personas con discapacidad e impulsando mejores alternativas de transporte público.

6.7 Diseñar y promover la incorporación de un marco fiscal en la Ley de Ingresos que fomente el uso del transporte público y, a su vez, permita disminuir los efectos negativos derivados del uso excesivo del automóvil.

6.8 Incorporar en la legislación el concepto de energía distribuida, que consiste en la generación de energía eléctrica en paneles solares en las casas habitación para las principales ciudades del país.

6.9 Reformar el marco legal para impulsar la creación del observatorio nacional de ordenamiento territorial sustentable como instrumento de participación ciudadana, con el objeto de vigilar los planes de desarrollo urbano de los centros de población para disminuir riesgos a la población y daños al medio ambiente.

Desarrollo sustentable, biodiversidad y conservación

Los efectos del desarrollo industrial, la urbanización y los modelos de consumo de los grandes centros urbanos han generado una crisis planetaria sin precedentes en la historia de la humanidad. La sustentabilidad no puede seguir siendo sólo un discurso y un recetario de buenas intenciones. Las medidas necesarias para iniciar una transición real hacia modelos de desarrollo sustentables serán cada vez más drásticas si persiste la inacción y la falta de compromiso con los cambios requeridos. Se debe encabezar la toma de conciencia sobre el peligroso curso que está tomando la nación al hacer caso omiso sobre el peligro que se cierne sobre nuestro futuro.

6.10 Reformar el artículo 3º constitucional para integrar en la educación los principios de uso racional y sustentable de nuestros recursos, y para garantizar el efectivo derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las generaciones

presentes y futuras, según lo establecido en el artículo 4º constitucional, así como su reconocimiento como parte de las obligaciones del Estado.

6.11 Reformar el párrafo tercero del artículo 27 en materia de propiedad y uso de las tierras y aguas nacionales, para integrar el principio de uso racional y sustentable dentro de las facultades que la Constitución reconoce a la nación, para regular el aprovechamiento de los elementos naturales comprendidos dentro de las tierras y aguas nacionales. Reformar el párrafo sexto del mismo artículo incluyendo la orientación a partir de estos principios para el otorgamiento de las concesiones que administra el Ejecutivo Federal. Garantizar los derechos de paso a la zona federal marítimo terrestre.

6.12 Reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Cambio Climático, y leyes correspondientes según el caso, para hacer más eficientes los recursos públicos y asegurar un beneficio social a la población que depende de los ecosistemas nacionales, en especial los que se encuentran en Áreas Naturales Protegidas; establecer la obligatoriedad de evaluar los programas y políticas públicas a partir de la medición de los impactos y resultados, y obligar al Ejecutivo Federal a considerar estas evaluaciones en el diseño y planeación de las políticas públicas en materia de medio ambiente y desarrollo social sustentable, para unificar los recursos destinados a compensaciones por accidentes o riesgos ambientales, como el Sistema Nacional de Seguros de Riesgos Ambientales y el Fondo de Responsabilidad Ambiental, para regular adecuadamente las actividades agropecuarias en zonas de aprovechamiento sustentable y reforzar el pago por servicios ambientales para cambio de suelo en zonas agrícolas, para crear la figura de Evaluación Ambiental Estratégica que sea obligatoria para los planes y programas de desarrollo urbano y con ello asegurar su total coordinación con los programas de ordenamiento ecológico territorial.

6.13 Reformar y promover marcos legales que impidan la instalación de corporativos e infraestructura masiva que deteriore todas las zonas ecológicas en las distintas regiones del país.

6.14 Reformar la Ley de Bienes Nacionales con el objetivo de establecer los principios y bases para la protección de los ecosistemas de las zonas marinas mexicanas que son de jurisdicción federal y son considerados bienes nacionales.

6.15 Homologar la revisión a las principales leyes federales y generales, con el fin de armonizarlas con el Protocolo de Nagoya.

6.16 Promover se incluyan del Presupuesto de Egresos mayores aportaciones para Áreas Nacionales Protegidas.

6.17 Impulsar la Ley General de Vida Silvestre para crear la figura jurídica de Corredores Biológicos que permitan interconectar áreas naturales protegidas y unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.

6.18 Promover en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la integración y fortalecimiento de cadenas productivas regionales de plantaciones forestales, estimulando la organización social y comunitaria por medio de capacitación e impulsando el mercado nacional de sus productos, así como programas de reforestación en bosques y zonas urbanas con especies productivas para que se promueva el desarrollo forestal sustentable, apropiadas a las diversas zonas ecológicas del país y acordes con las tendencias del cambio climático.

Agua

En el horizonte crítico, abierto por los efectos inminentes del cambio climático, el agua se convierte en un tema de seguridad nacional, pues de su disponibilidad dependerá la existencia misma de la nación. Es evidente que no estamos haciendo lo suficiente para la adecuada planeación, manejo responsable y racional de nuestros recursos hídricos, especialmente en las zonas y regiones del país donde ya es un problema crítico.

6.19 Reformar la Ley de Aguas Nacionales en concordancia con la propuesta de reforzamiento de las facultades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que se pueda sancionar y castigar, de acuerdo con la legislación correspondiente, a los responsables que contaminen y hagan un uso ineficiente de los recursos hídricos en el territorio nacional, para establecer concordancia entre el Ordenamiento Ecológico Territorial y la administración del agua con visión de cuenca, y promover la participación ciudadana a través de las Comisiones y Consejos de Cuenca.

6.20 Reformar el marco legal para reforzar las facultades y capacidades de las instancias responsables de garantizar el abasto de agua potable en calidad y cantidad suficientes, y evitar la continua degradación y sobreexplotación de los recursos hídricos nacionales, para que incidan a corto y largo plazo en la racionalización de las demandas que el crecimiento poblacional, industrial y sector agrícola tendrán sobre el uso de agua, mediante el establecimiento de nuevas bases para implantar modelos de consumo fundamentados en un uso racional y acotado por sectores.

6.21 Introducir las reformas necesarias para delimitar y proteger las zonas federales asociadas a los recursos hídricos, y promover la creación de una instancia especial de salvaguarda de estas zonas.

Energía

La reforma energética fue concebida para resolver de fondo los principales obstáculos estructurales que impedían el desarrollo globalmente competitivo de este sector, y sentó las bases para un aprovechamiento más racional y rentable de los recursos energéticos de la nación. No obstante, es previsible que surjan resistencias institucionales, especialmente cuando el Gobierno Federal fue originalmente renuente a muchos de los cambios propuestos y que hoy forman parte de la Constitución y de las leyes secundarias. La obligación es vigilar y proponer las medidas correctivas necesarias para alcanzar los objetivos de interés nacional que contienen las reformas.

6.22 Modificar la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética y la Ley de Hidrocarburos para asegurar que contemplen en todo el proceso de la cadena productiva energética, el cuidado al medio ambiente en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Ambiente del Sector Hidrocarburos

6.23 Fortalecer los medios legales para garantizar la colaboración eficiente entre el sector público y el sector privado para la producción de energía eléctrica y gas natural, obligándolos a integrar medidas de transparencia y rendición de cuentas.

6.24 Garantizar el establecimiento en los distintos marcos normativos y legales, mecanismos e instancias para generar medidas eficientes que impidan la extracción ilegal de hidrocarburos, ya que constituye un grave atentado en contra del patrimonio nacional y en ocasiones pueden provocarse accidentes en los que se contaminan las aguas y el suelo.

6.25 Promover se incluyan en la Ley de Ingresos incentivos y estímulos a las empresas que se abastecen de energías limpias para la realización de sus actividades.

6.26 Aprobar y aplicar de manera integral la Ley de Transición Energética para promover por todos los medios posibles la producción de energías renovables.

6.27 Transferir el capítulo de Certificados de Energías Limpias de la Ley de la Industria Eléctrica a la nueva Ley de Transición Energética.

6.28 Modificar el capítulo relativo a energías limpias en la Ley de la Industria Eléctrica, con objeto de clarificar las diferencias con las energías renovables y garantizar la promoción de éstas en la generación de electricidad.

6.29 Destinar recursos en el Presupuesto de Egresos para estudios e investigación en universidades, fundaciones y asociaciones para la promoción de energías renovables.

6.30 Vigilar la consolidación del nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) para garantizar una operación eficiente y en igualdad de condiciones frente a las compañías petroleras del mundo.

Cambio climático

Los efectos del cambio climático amenazan con ser devastadores y una adecuada planeación de mediano y largo plazo debe ser prioridad en todos los gobiernos. Un área crítica en México es la que se refiere al ordenamiento de las zonas de alto riesgo que empiezan a ser gravemente afectadas por la severidad de los fenómenos meteorológicos.

6.31 Reformar la Ley General de Protección Civil para hacer obligatorio en los tres órdenes de gobierno que los Atlas de Riesgos se mantengan actualizados y completos. Hacer efectivo el castigo a los responsables que construyan en zonas de

riesgo y afirmar una política preventiva para la adaptación a los efectos del cambio climático.

6.32 Homologar los recursos federales, principalmente los del Anexo 16: “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio, y del Fondo para el Cambio Climático, con la finalidad de hacer un uso eficiente de los mismos y coordinar acciones de las dependencias de la administración pública destinadas a reducir los efectos del cambio climático, y así cumplir con las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, visión 10-20-40.

Contaminación y manejo de residuos

Es fundamental reforzar las capacidades y recursos destinados a la regulación, control y manejo adecuado de contaminantes, materiales peligrosos y desechos tóxicos, así como garantizar las capacidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para enfrentar contingencias ambientales catastróficas. Igualmente, es necesario establecer metas precisas para disminuir los índices de contaminación ambiental y establecer fondos y mecanismos adecuados para asumir los costos sociales y económicos de las medidas necesarias para alcanzar dichas metas.

6.33 Reformar la Ley de Responsabilidad Ambiental para que otorgue mayores atribuciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con la finalidad de sancionar de manera expedita los daños ambientales causados por disposición de residuos fuera de la norma.

6.34 Modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se le otorguen facultades que le permitan sancionar y multar a los infractores de manera directa.

6.35 Modificar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos con el fin de establecer la obligatoriedad a nivel nacional, por parte de los responsables, de registrar ante las autoridades los residuos de manejo especial, peligrosos, biológicos-infecciosos y urbanos.

6.36 Promover la incorporación en la Ley de Ingresos de incentivos fiscales especiales que promuevan el reúso y reciclaje de residuos, la incorporación de nuevas tecnologías y de generación de energía.

6.37 Establecer en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la obligatoriedad de la captación de gas metano en rellenos sanitarios, biodigestores y producción de composta.